

# La batalla de Francia

SAMI NAÏR

EL PAÍS - Internacional - 23-10-2010

Lo que está pasando ahora en Francia era previsible. La sublevación de las clases populares vinculadas a los servicios públicos, de las clases medias seguidas por una parte importante de la juventud, de los estudiantes, no se puede entender si no se tiene en cuenta la situación de conflicto permanente creada por el propio modo de actuar del Gobierno y del presidente Nicolas Sarkozy. Sobre la cuestión de fondo, o sea la reforma de las pensiones y de la edad de jubilación, la posición del Gobierno fue dictada a los sindicatos sin posibilidad de negociación. Retomando las propuestas de la patronal, que pedía, desde 2007, el retraso de la edad legal de las jubilaciones, la prolongación del plazo de cotizaciones y la evaluación restrictiva del trabajo penoso, el Gobierno propuso un proyecto de ley que impone el retraso de la edad legal mínima de jubilación de los 60 a los 62 años, la prolongación de las cotizaciones durante 41,5 años y el retraso de la edad para cobrar el total de la pensión de jubilación de 65 a 67 años para los que no hayan cotizado el tiempo necesario. Estas propuestas vienen acompañadas de muchas otras sobre la convergencia público-privada, el empleo de personal de mayor edad, de los jóvenes, de los derechos de los parados, de las prestaciones por maternidad, y otros puntos importantes. De hecho, el Gobierno, aprovechando el traumatismo provocado por la crisis económica, pensaba vender todo el paquete a la vez, yendo mucho más allá de lo que se estaba hablando en Francia estos últimos años.

En el fondo, todo el mundo, incluso los sindicatos, sabe que habrá que hacer reformas, tanto por causa de la prolongación de la esperanza de

vida como por la adaptación del sistema de jubilaciones a las nuevas condiciones de la economía francesa dentro del marco de la globalización. Las posiciones del conjunto de los sindicatos (los seis más importantes del país) apuntan que se trata de una reforma global, calificada de injusta (va a profundizar en las desigualdades), esencialmente pagada por los asalariados y, sobre todo, sin un proyecto de plan de empleo y de lucha en contra de la precariedad. Lo que significa que varias categorías sociales tendrán que trabajar hasta los 72 años para poder conseguir jubilaciones completas. Piden, desde luego, una reunión comparable a la que tuvo lugar después de Mayo del 68, llamada de "Grenelle", en la que se adoptó una reforma global consensuada entre el Gobierno y los sindicatos sobre el sistema social y el mercado de trabajo. El Gobierno rechazó la propuesta y, desde la primera manifestación del 24 de junio, no quiso negociar. Dicho de otra manera, ha elegido desde el principio la confrontación directa. Frente a esta ofensiva, los sindicatos -sus reivindicaciones son serias y abiertas (sin embargo, no hay un acuerdo global entre ellos mismos, y que hubiera podido ser un margen de maniobra importante para el Gobierno)-, consideraron que el Ejecutivo quería sobre todo debilitarlos. De ahí, el inevitable enfrentamiento.

Otro elemento importante para entender la violencia del enfrentamiento: desde su elección, Sarkozy nunca pudo conseguir el apoyo mayoritario para su política de "reformas". La idea que todos los sondeos de estos dos últimos años ponen de relieve es que su política es profundamente conservadora y beneficia sobre todo a los grupos económicos privilegiados. Un sentimiento amargo de injusticia flota en el aire, y los métodos autoritarios y a veces teñidos de desprecio de los más altos responsables políticos hacia la ciudadanía acaban de transformar este

sentimiento en rebeldía "lógica", para hablar como el poeta Arthur Rimbaud. Dicho de otra manera, la situación de crisis actual tiene tanto que ver con el rechazo de unas reformas consideradas injustas en un contexto de profundas desigualdades como el enfrentamiento con un presidente y un Gobierno que han perdido todas las elecciones desde las presidenciales de 2007. El tema sindical se mezcla con el rechazo político global.

¿Qué va ocurrir? Si el Gobierno mantiene su proyecto, probablemente asistiremos a una contestación social "rastrera" durante los próximos años, sabiendo que va a ser un tema clave en las elecciones presidenciales de 2012. Sin olvidar que los huelguistas franceses tienen la convicción de que se trata de una contienda que supera a su país, y que tendrá muchas consecuencias sobre el resto de los movimientos sociales en Europa. La batalla de Francia está lejos de acabarse.